



PROCESOS: 2024-007

DE: Departamento del Putumayo

CONTRA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VÍAS TERCARIAS con Nit. 901.240.955 6 y OTROS

CONCEPTO: Anticipo no ejecutado cto. 1225 de 2018

Correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

RESOLUCIÓN No 153
Del 4 de octubre de 2024

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION 075 DEL 8 DE AGOSTO DE 2024."

En uso de las facultades conferidas por el Art. 5º de la Ley 1066 de 2006 y su Decreto Reglamentario 4473 de 2006, en especial por la Ordenanza 766 de 2018 y Decreto 325 de 2017, expedido por el Departamento del Putumayo, "Por el cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera" y teniendo en cuenta que,

ANTECEDENTES

Que la Oficina de Contratación del Departamento del Putumayo, allegó a esta Despacho para cobro coactivo, documentos que conforman título ejecutivo, entre ellos tenemos:

- 1º Copia contrato No 1225 de 2018
- 2º Póliza de seguros de cumplimiento No NB100100416, sus anexos y certificaciones
- 3º Orden de pago del anticipo Cto. 1225-2018
- 4º Registro único tributario Consorcio vías terciarias.
- 5º Resolución por la cual se autoriza la modificación de miembros del consorcio vías terciarias en el contrato No 1225 de 2018.
- 6º Resolución por medio de la cual se autoriza la modificación del representante legal del Consorcio Vías terciarias en el Cto 1225 de 2018.
- 7 Resolución No 189 de 2024 por medio del cual se ordena la liquidación unilateral de contrato de obra No 1225 de 2018.
- 7º Resolución No 021 de 2023 por medio de la cual se declara el siniestro con cargo de buen manejo y correcta inversión del anticipo otorgado mediante seguro de cumplimiento a favor de las entidades Estatales No NB 100100416 que garantiza el contrato de obra pública No 1225 de 2018.
- 8º Resolución No 022 de 2023 por medio de la cual se resuelve los recursos de reposición en contra de la resolución No 021 de 2023
- 9º Constancia de ejecutoria

Que, una vez revisado los documentos allegados que conforman el título ejecutivo en cuestión, se logró determinar que los mismos se ajustan a derecho, lo que conlleva a que la suscrita Tesorera General del Departamento del Putumayo, competente para adelantar y ejecutar procesos por

jurisdicción coactiva, de inicio al proceso administrativo de cobro coactivo 2024-007, a favor del Departamento del Putumayo y contra la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. con Nit. 860.037.013 6, CONSORCIO VIAS TERCARIAS con Nit. 901.240.955 6 y OTROS, por concepto de clausula penal incumplimiento del contrato No 1225 de 2018

Que dentro del proceso de cobro coactivo 2024-007, el Departamento del Putumayo a expedido los siguientes actos administrativos:

Resolución No 059 del 24 de junio de 2024 por medio del cual resuelve LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO Y ORDENA MEDIDA PREVENTIVA.

Estando dentro del término establecido en el artículo 830 del E.T., LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, por intermedio de su apoderado judicial, presento dos escritos de excepciones:

PRIMER ESCRITO DE EXCEPCIONES.

1º *indebida tasación del monto de la deuda*

2º *falta de título ejecutivo. falta de inexistencia de título ejecutivo de la obligación de pago de intereses corrientes, desde el desembolso del anticipo, ni de mora (violación del art. 4 ley 80/93), ni de intereses moratorios según el código de comercio o incompetencia del funcionario que profirió el mandamiento de pago.*

3º *falta de título ejecutivo. la obligación que se pretende ejecutar supera el límite del valor asegurado, incluido los intereses de la l 80/93 a.4.0.8. o incompetencia del funcionario al dictar el mandamiento de pago.*

4º *excepción de pago efectivo, además, extinción de la obligación por pago.*

5º *interposición del medio de control de controversias contractuales de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.*

6º *falta de ejecutoria del título*

SEGUNDO ESCRITO DE EXCEPCIONES.

1º *indebida tasación del monto de la deuda.*

2º *falta de título ejecutivo. falta o inexistencia de título ejecutivo de la obligación de pago de intereses corrientes, desde el desembolso del anticipo, ni de mora (violación del art. 4 ley 80/93), ni de intereses moratorios según el código de comercio o incompetencia del funcionario que profirió el mandamiento de pago.*

3º *falta de título ejecutivo. la obligación que se pretende ejecutar supera el límite del valor asegurado, incluido los intereses de la l 80/93 a.4.0.8. o incompetencia del funcionario al dictar el mandamiento de pago.*

4º *excepción de pago efectivo, además, extinción de la obligación por pago.*

5º *interposición del medio de control de controversias contractuales de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.*

6º *falta de ejecutoria del título. el mandamiento de pago no integra la totalidad de los documentos que deben conformar el título ejecutivo complejo, configurándose así la falta de título ejecutivo.*

7º *Las medidas cautelares decretadas por la Gobernación del Putumayo en la orden de pago supera el tope de embargabilidad permitidos por los Estatutos Tributarios y la normatividad vigente.*

Que mediante resolución No 075 del 8 de agosto de 2024, la funcionaria ejecutora resolvió Declarar no probadas las excepciones propuestas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, contra el mandamiento de pago expedido dentro del proceso de cobro coactivo N° 2024-007.





Estando dentro del término establecido en el artículo 834 del E.T., la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, presentó recurso de reposición contra la resolución No 075 del 8 de agosto de 2024, por medio del cual resuelve excepciones propuestas contra el mandamiento de pago dentro del proceso 2024-007

EL RECURSO PROPUESTO

Que el día 9 de septiembre de 2024, la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, presentó recurso de reposición contra la resolución No 075 del 8 de agosto de 2024, en él solicita al Departamento del Putumayo ordene la terminación del proceso coactivo administrativo de la referencia procediendo con el levantamiento de las medidas preventivas decretadas en contra de mi representada COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., en concordancia con lo establecido en el artículo 833 del Estatuto Tributario Nacional, y de conformidad con el artículo 596 del Estatuto Tributario del Departamento del Putumayo, declarando probadas las excepciones propuestas y debidamente sustentadas en el presente escrito". Petición que argumenta en los siguientes términos:

1º "contrario a lo decidido, la excepción de falta de título ejecutivo en relación con el cobro y cálculo de intereses es procedente, conforme a la ley 80 de 1993, la jurisprudencia del consejo de estado y los conceptos de la sala de consulta y servicio civil. Sostiene el Departamento del Putumayo, en la resolución objeto de censura, que la orden de pago se fundamenta en el cálculo de "perjuicios irremediables" derivado del trámite de sanción contractual previamente declarado por la Gobernación; no fue objeto de la decisión adelantada por la Gobernación del Putumayo, por lo que no puede, ahora, al resolver las excepciones, introducir un concepto que es ajeno al título ejecutivo complejo, ya que este no condenó al pago de perjuicios irremediables, por cuanto no sería procedente hacerlo. De acuerdo con la Ley 1474 de 2011, la Administración debe establecer cuáles son las consecuencias del detrimento y demás efectos adversos derivados del supuesto incumplimiento; al punto de que la Administración, al declarar el incumplimiento y/o la ocurrencia del siniestro, también debe determinar de manera concreta cuál es el monto del detrimento ocasionado, y al cuantificarlo, lo hace exigible de manera precisa y clara. Es decir, la Administración no condenó ni al contratista ni a la aseguradora garante al pago de unos llamados "perjuicios irremediables", ni dispuso en el acto administrativo una orden para que se hiciera el cálculo de los mismos. No se trata, o mejor, no existe una especie de condena en abstracto, entre otras cosas, porque la Administración no puede imponer condenas de ese tipo; y si la hubiera, tendríamos que llegar a la conclusión de que el título ejecutivo no existe, en la medida en que la obligación, al obrar coactivamente, no sería expresa, clara ni exigible. Por la naturaleza de la materia, no podría iniciarse cobro coactivo, ya que sería necesario, primero, establecer ex ante la regulación de los supuestos "perjuicios irremediables", lo cual solo podría hacerse ante el juez competente de la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que la Gobernación perdió competencia cuando finalizó el trámite de la sanción contractual respectiva, y también porque el contrato estatal en cuestión ya está liquidado. Por consiguiente, no puede esgrimirse que la aseguradora incurrió en una omisión respecto del supuesto cálculo "de los perjuicios irremediables", toda vez que, si el título ejecutivo exigiera hacer una cuantificación de perjuicios, evidentemente estos corresponderían a un concepto que no hace parte de una obligación clara, expresa y exigible, sino que dependería del resultado de su debate judicial, por supuesto, para determinar su supuesta existencia y probar la cuantía. ...(...)

2º "La excepción falta de título ejecutivo por el indebido cobro de los intereses está probada - indebida ejercicio de la potestad de cobro coactivo. Contrario a lo afirmado por el Departamento del Putumayo, la obligación que se pretende ejecutar no solo supera el límite del valor asegurado, sino que además se fundamenta en el cobro de intereses que no se encuentran debidamente incorporados en los actos administrativos que conforman el título ejecutivo complejo. Nótese que la administración sostiene en su resolución que, por vía coactiva, no es dable para esta analizar la legalidad de la póliza ni el límite de su cobertura; no obstante, la Tesorera General del Departamento incurrió en una contradicción de racionalidad del ejercicio de la potestad de cobro coactivo, puesto que se apartó del análisis del contrato de seguro, que a su vez hace parte integral del título ejecutivo complejo, pero incorporó a la orden de pago una obligación que no quedó consignada en ninguno de los actos administrativos que conforman el multicitado título ejecutivo complejo. En otras palabras, según el Departamento para hacer exigibles los intereses, no desde cuando se decretó la sanción y se cuantificaron los supuestos perjuicios, sino erradamente desde la fecha en que fueron entregados los recursos al contratista, a modo de anticipo, considera que sí sería procedente, sin que exista norma jurídica que así lo permita, que en sede del cobro coactivo se agreguen, analicen, interpreten y hasta adicionen obligaciones que no fueron definidas previamente por la administración, ni fueron objeto de debate en el proceso sancionatorio de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en el cual no se le dio la oportunidad al contratista y al asegurador de defenderse frente a semejante criterio equivocado; efectivamente de manera infundada el Departamento si los incorporó, careciendo de título ejecutivo



que los comprenda, o de mención alguna en la resolución que sirve de base del cobro, por lo tanto es un yerro del mandamiento ejecutivo haber librado orden de pago en beneficio del departamento y en detrimento del patrimonio de mi representada por los intereses que señala deben liquidarse y pagarse, ya que es inexistente la obligación, como se acredita de la mera revisión de los actos administrativos que conforman el trámite de sanción contractual. Por consiguiente, se carece del derecho alegado a cobrar intereses con base en el anticipo reputándolos como perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, ya que el trámite de sanción contractual se circunscribió al amparo del anticipo y no al amparo del cumplimiento. También yerra el Departamento cuando aduce el decreto 325 del 2017, mediante el cual se adoptó el reglamento interno del recaudo de cartera en ese Departamento por cuanto la competencia para adelantar el procedimiento coactivo, no faculta a la administración para emitir un mandamiento de pago por conceptos que no están previstos o incorporados en el título ejecutivo, y en tal virtud carece de competencia la funcionaria para el cobro coactivo de conceptos que son extraños al título ejecutivo que se está esgrimiendo....(..)

3º "Contrario a lo decidido por el departamento del putumayo, está probado que la obligación que se pretende ejecutar supera el límite del valor asegurado. Desconoce el Departamento del Putumayo en la resolución objeto de censura, que el valor de la ejecución se adelanta excediendo el límite del valor asegurado, violando las normas del Código de Comercio, artículos 1036 al 1162, por cuanto los llamados "perjuicios irremediables" por parte del Departamento no pudieron haberse causado antes de la declaratoria del supuesto siniestro. En segundo lugar, la resolución dictada con base en el artículo 86 de la Gobernación concretó en una cifra exacta el monto de la indemnización que debía pagarse, y, por ende, no es posible, en sede de cobro coactivo, desbordar el tope del acto administrativo que sirve de base al recaudo ni el límite de las obligaciones del asegurador, so pena de violar las normas de orden público citadas del Código de Comercio, así como las de la Ley 80 de 1993. Esto, además, vulnera el debido proceso y el derecho de defensa, ya que mi representada no tuvo la oportunidad de controvertir el criterio equivocado del Departamento dentro del trámite de la sanción contractual. Sobre el particular, en la Resolución No. 021 de 2023 se indicó que la obligación de pagar de la aseguradora debía cancelarse en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, es decir, en el mes siguiente a la ejecutoria de la resolución respectiva....(..) Luego, la Resolución No. 022 del 12 de mayo de 2023, mediante la cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la mencionada Resolución No. 021 del 21 de abril de 2023, confirmó en su integridad la decisión tomada por la administración en el proceso sancionatorio. Por lo tanto, la Tesorería General del Departamento del Putumayo no podía incorporar una obligación que no existe en el título ejecutivo complejo, como lo es el pago de intereses corrientes a partir del giro del anticipo, ni desde la fecha en la que el departamento lo desembolsó, ni por concepto de intereses moratorios calculados conforme al Código de Comercio del interés corriente incrementado en el 1.5%, ya que las normas especiales prevalecen y, según la Ley 80 mencionada, la obligación debe establecerse actualizando del monto del capital y a este luego se le aplica como interés moratorio el doble del interés legal (12% anual); en otras palabras, una tasa pura....

4º contrario a lo decidido, está probada la excepción de pago efectivo y la extinción de la obligación por pago ante la indebida tasación de la deuda, conforme a los intereses civiles aplicados según el artículo 4º, numeral 8º de la ley 80 de 1993. el departamento del putumayo sostiene que la excepción de pago efectivo no está llamada a prosperar debido a que la compañía mundial de seguros s.a. aún tiene pendiente el pago de intereses corrientes y moratorios relacionados con el contrato de obra no. 1225 de 2018. no obstante, la administración omite analizar de manera adecuada el título ejecutivo complejo, el cual evidencia que los intereses reclamados no fueron objeto de discusión en los actos administrativos sancionatorios que dieron lugar a dicho título. además, estos intereses no se incorporaron como una obligación a cargo de la compañía de seguros. De manera reiterada, se ha expuesto a lo largo del presente procedimiento coactivo que los intereses aplicables deben ser los civiles conforme al artículo 4º, numeral 8º de la ley 80 de 1993. por lo tanto, resulta imperativa la terminación del proceso de cobro coactivo en lo que respecta a mi representada. esto se fundamenta en que la compañía mundial de seguros realizó el pago efectivo el 17 de julio de 2024, mediante la orden de pago no. 1117663, por un valor de seis mil millones trescientos ochenta millones ochocientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos m/cte (\$6,380,899,838.00) a favor del departamento del putumayo. La liquidación correcta del valor pagado por la aseguradora es la siguiente, hecha conforme a la ley 80 de 1993 y lo resuelto en el trámite de sanción contractual: en primer lugar, se tomó el valor de \$ 5.247.963.388,488 indicado en la sanción contenida en el acto administrativo que sancionó, el cual se actualizó o indexó según el artículo 4 numeral 8 de la ley 80 de 1993. para ello, se tuvo en cuenta el ipc inicial de junio de 2023 (133.78), mes siguiente al que se notificó el acto administrativo que confirmó la sanción, y el ipc final, que corresponde, según la certificación del dane, al mes de junio de 2024 (143.38), siendo este índice el que debe utilizarse para julio de 2024, lo cual arrojó como resultado del capital actualizado la suma de \$5.624.555.269,95. luego, al valor del capital actualizado, indicado inmediatamente antes, se le sumaron los intereses moratorios, aplicando (acorde con el citado artículo 4 l.80/93), el doble del interés legal civil, es decir el 12% anual, convertido a la tasa mensual (1%), por cada mes desde el 16 de junio de 2023, fecha en la cual se cumplió el término de un mes, que conforme al artículo 1080 del c.co. tenía la aseguradora para pagar el valor de la sanción impuesta. los intereses moratorios liquidados como lo ordena la ley hasta el 18 de julio de 2024, ascienden a \$756.344. 668....



5° contrario a lo decidido, está probada la excepción de interposición del medio de control de controversias contractuales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En el presente trámite de cobro coactivo, la Tesorería General del Departamento del Putumayo libró mandamiento de pago mediante la Resolución No. 059 del 24 de junio de 2024, pasando por alto que mi representada ya había presentado una demanda de controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo del Putumayo el 22 de abril de 2024 y que se tramita bajo el radicado 52001233300020240011900. Dicha demanda tiene como objetivo la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 021 y 022 de 2023, mediante las cuales se declaró el siniestro y se afectó la garantía de manejo del anticipo. Además, se pretende el restablecimiento del derecho, con la restitución del valor pagado junto con su respectiva indexación. Pese a estar debidamente comprobada la interposición del medio de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la administración, de manera errada, sostiene en la resolución por medio de la cual se resolvieron las excepciones promovidas por mi representada, que no es procedente aplicar la suspensión del proceso coactivo hasta tanto no se tome una decisión definitiva en el proceso judicial. Estos actos administrativos, que actualmente están siendo cuestionados en sede contencioso administrativa, conforman el título ejecutivo complejo sobre el cual se basa el mandamiento de pago no versan sobre el procedimiento coactivo, por lo que no le es aplicable el artículo 101 del CPACA al que tácitamente hacen referencia en el numeral 5, página 7, de la Resolución No. 075 de 2024. Es así como queda demostrado que la administración confunde el propósito de los medios de control; el ya presentado rebate la validez del acto administrativo que decidió el proceso sancionatorio contractual, no el que cuestiona la decisión sobre las excepciones planteadas contra el mandamiento de pago, pues para llegar a ese medio de control primero debe decidirse este recurso. Ahora bien, para que se pueda predicar la ejecutoria de un título ejecutivo el estatuto tributario en su artículo 829 estableció lo siguiente: "Art. 829. Ejecutoria de los actos. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno.
2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto o no se presenten en debida forma.
3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y
4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso." (negrilla y subrayado fuera del texto)

En relación con la excepción contenida en el numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario, el Consejo de Estado, mediante sentencia ha referido lo siguiente: "(...) El artículo 831 del Estatuto Tributario señala dentro de las excepciones que se pueden proponer contra el mandamiento de pago, la de "interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo". Esta excepción, cuyo efecto no es otro que el de suspender el proceso de cobro que se esté adelantando, se acredita con la admisión de la demanda, pues en este momento se verifica que la misma ha reunido todos los requisitos de ley para que sea conocida por el juez, y, además, se traba la relación jurídico procesal entre las partes. (...) ³ Conforme a lo expuesto y habiéndose acreditado la admisión de la demanda de controversias contractuales ante la jurisdicción contencioso administrativa, es imperativo que se revoque inmediatamente la Resolución No. 059 del 24 de junio de 2024, mediante la cual se libró el mandamiento de pago dentro del cobro coactivo en cuestión. La exigibilidad del título ejecutivo, compuesto por los actos administrativos que actualmente están siendo demandados, está reglada de manera especial. Esto se debe a que la ejecutoriedad del título se adquiere únicamente cuando la jurisdicción competente resuelva de manera definitiva la acción de controversias contractuales promovida en su contra. Ante esta situación, estando probada la presente excepción, no existe más alternativa para la entidad ejecutante que dar aplicación a lo establecido en el artículo 833 del Estatuto Tributario, veamos: "(...) Art. 833. Excepciones probadas. Si se encuentran probadas las excepciones, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento cuando fuere del caso y el levantamiento de las medidas preventivas cuando se hubieren decretado. En igual forma, procederá si en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones.

6° La resolución no. 075 del proceso de cobro coactivo no. 2024-007, expedida mediando falsa motivación, al igual que conjura una desviación de poder y transgrede los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, y vulnera lo señalado en cada una de las excepciones propuestas. la resolución no. 075 del 24 de junio de 2024 se expidió mediando falta de motivación. la tesorería general del departamento del putumayo incurrió en falsa motivación al haber expedido el mandamiento de pago en contravención a los derechos fundamentales al debido proceso, así como a las transgresiones señaladas en cada una de las excepciones propuestas por mi representada. la administración, al proceder como lo ha hecho, ha producido un daño antijurídico a mi representada, actuando en clara violación del principio de legalidad y desconociendo disposiciones contenidas en la constitución política, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011 (cpaca), la ley 2080 de 2022, el código civil, el código de comercio, el código general del proceso, el estatuto tributario, la ordenanza 766 de 2008 o estatuto tributario de rentas del departamento del putumayo, la ley 53 de 1957, la ley 14 de 2013, el contrato estatal de obra que culminó con la sanción que se está cobrando y el contrato estatal de seguro de cumplimiento documentado en la póliza no. nb100100416 además, la decisión ha sido adoptada sin considerar la línea jurisprudencial del consejo de estado, en particular la sentencia de 2019 (expediente no.

19.933, radicación no. 25000232600019971393001, consejero ponente: mauricio fajardo gómez), la sentencia del 24 de abril de 2024 (radicado no. 25000-23-26-000-2006-00637-01, consejero ponente: dr. william barrera muñoz), y la sentencia del 27 de noviembre de 2013 (radicado no. 660012331000200200391, consejero ponente: dr. mauricio fajardo). estas decisiones abordan de manera clara cómo deben calcularse los intereses, conforme a lo dispuesto por el legislador en el artículo 4º, numeral 8º, de la ley 80 de 1993. la omisión de esta jurisprudencia resulta en un cálculo incorrecto de los intereses, lo cual constituye una violación de la normativa aplicable en materia de contratación estatal. por lo tanto, la resolución cuestionada se encuentra viciada de falsa motivación, lo cual constituye una violación flagrante de los derechos fundamentales de mi representada y de las normas sustanciales y procesales que regulan el caso....

7º Contrario a lo decidió por el departamento del putumayo las medidas cautelares decretadas por la gobernación del putumayo en la orden de pago supera el tope de embargabilidad permitidos por los estatutos tributarios y la normatividad vigente. el departamento del putumayo yerra gravemente en la expedición de la resolución no. 059 de 2024, dentro del proceso no. 2024-007, al emitir un mandamiento de pago basado en un supuesto cálculo de intereses generados por un anticipo no amortizado y al ordenar una medida preventiva que excede los límites legales establecidos. aunque la resolución intenta ampararse en el artículo 837-1 del estatuto tributario para justificar la inembargabilidad ilimitada en contra de personas jurídicas, dicha disposición no es aplicable en este caso, ya que el artículo 838 del mismo cuerpo normativo claramente establece que el valor de los bienes embargados no debe exceder el doble de la deuda más sus intereses. al exceder este límite, la medida preventiva dictada no solo resulta desproporcionada, sino que vulnera principios básicos del debido proceso y de las normas de orden público, afectando los derechos de la compañía mundial de seguros s.a. por lo tanto, es evidente que el departamento ha incurrido en un error de interpretación y aplicación de las normas, lo que invalida la legalidad de la medida adoptada. el departamento del putumayo excedió su competencia al proferir la resolución no. 059, mediante la cual se libró mandamiento de pago y se ordenó una medida preventiva, ya que decretó como medida cautelar el embargo de los bienes pertenecientes a la compañía mundial de seguros s.a., tales como inmuebles, muebles, dinero depositado en cuentas de ahorro o corriente, y depósitos de dinero en las cuentas de ahorro y/o corriente de la entidad, hasta alcanzar la suma de dieciséis mil quinientos nueve millones trescientos cuatro mil seiscientos veintidos pesos con ocho centavos m/cte. (\$16.509'304.622,8). no obstante, lo anterior desconoce lo establecido en el artículo 604 del estatuto de rentas del departamento del putumayo, en lo atinente a que el valor de los bienes embargados no podrá exceder el doble de la deuda más intereses, así: "artículo 604. límite de los embargos. el valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. si efectuado el avalúo de los bienes estos excedieren la suma indicada, deberá reducirse el embargo si ello fuere posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del interesado." (negrilla adrede). en ese sentido el límite de los embargos para el caso de marras resulta abiertamente inconsulto e infundado por cuanto no puede perderse de vista que la liquidación del crédito que en derecho corresponde no es otra más que una en la que se aplique el interés moratorio de conformidad con lo estatuido en el artículo 4º del ordinal 8º de la ley 80 de 1993, esto es, el doble del interés legal civil, es decir el 12% anual, convertido a la tasa mensual (del 1%), por cada mes desde el 16 de junio de 2023, fecha en la cual se cumplió el término de un mes, que conforme al artículo 1080 del c.co. tenía la aseguradora para pagar el valor de la sanción impuesta. el resultado total de la liquidación de la obligación corresponde a la determinada y remitida a la gobernación del putumayo, por medio de la cual se da a aplicación al mencionado artículo ajustando el valor de la obligación a lo que por derecho corresponde, es decir que deben liquidarse los intereses moratorios a la tasa del doble del interés civil, es decir a la tasa del 12%, y el resultado de su cálculo arroja el siguiente resultado: intereses \$756.344.668, que sumados al capital indexado (\$5.624.555.269,95), da el valor total de la deuda, correctamente tasada, de \$6.380.899.837,95, m.cte. De acuerdo con la liquidación previamente realizada, se constata que el monto total de la obligación, correspondiente a seis mil trescientos ochenta millones ochocientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos /cte (\$6,380,899,838.00), es inferior al valor liquidado por el departamento del putumayo. esto pone de manifiesto que la medida preventiva adoptada excede el doble del monto de la deuda más sus intereses, vulnerando así lo dispuesto en la normativa aplicable. cabe destacar que los intereses imputables a la compañía de seguros comenzaron a generarse a partir del mes siguiente a la ejecutoria del acto administrativo que confirmó el título ejecutivo complejo, es decir, a partir del 16 de mayo de 2023. además, es pertinente resaltar que la liquidación de los intereses debió realizarse conforme a lo establecido en el artículo 4, ordinal 8, de la ley 80 de 1993, estatuto de contratación estatal, regla que no fue debidamente observada por el departamento. Es importante advertir que la medida cautelar adoptada por el departamento del putumayo resulta exorbitante en relación con la realidad de la obligación que se reclama contra mi representada. como se ha expuesto a lo largo de este escrito, la liquidación del crédito fue emitida con serias inconsistencias e irregularidades en su tasación. además, el límite de embargabilidad supera el valor asegurado en el amparo de buen manejo del anticipo, afectado a través de la resolución no. 021 del 21 de abril de 2023. por lo tanto, dicha medida debe ser levantada, ya que los actos administrativos que conforman el título ejecutivo complejo han sido demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. en este sentido, el departamento del putumayo debe acatar lo dispuesto en el artículo 602 del estatuto de rentas del departamento, que señala: "artículo 602. medidas preventivas. previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad. (...) cuando se hubieren decretado medidas cautelares y el deudor demuestre que se ha admitido demanda contra el título ejecutivo y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, se ordenará levantarlas."Asimismo, el artículo 599 del código general del proceso indica que el juez puede limitar los embargos a lo estrictamente necesario, y que el valor de los bienes embargados no puede exceder del doble del crédito, sus intereses y las costas, salvo en situaciones excepcionales. en virtud de lo anterior, es evidente que la medida cautelar decretada en la orden de pago no. 059 de 2024 excede los límites de embargabilidad establecidos tanto en el estatuto tributario nacional como en la ordenanza no. 766 del departamento del putumayo. además, la liquidación del crédito realizada por el departamento presenta inconsistencias que provocan una desproporción en el monto embargado frente a la obligación real, lo que afecta gravemente el patrimonio de mi representada y vulnera sus derechos fundamentales. esta situación justifica la vigilancia de la actuación administrativa emprendida por la gobernación del putumayo. finalmente, resulta necesario que el superior jerárquico de la gobernación del putumayo evalúe la conducta de los funcionarios involucrados en el procedimiento de cobro coactivo, ya que en la orden de pago no. 059 del 24 de junio de 2024 se decretó el embargo de bienes cuyo titular corresponde a mi representada, incluyendo inmuebles, muebles, dineros en cuentas bancarias y depósitos de dinero, hasta la concurrencia de dieciséis mil quinientos nueve millones trescientos cuatro mil seiscientos veintidós pesos con ocho centavos m/cte (\$16.509'304.622,8). esta medida desproporcionada vulnera los derechos fundamentales de mi representada y afecta gravemente su patrimonio. por lo tanto, contrario a lo esgrimido por el departamento del putumayo, la presente excepción debe declararse como probada lo que a la postre se traduce en el levantamiento de la medida preventiva de embargo por las razones expuestas.

CONSIDERACIONES

Que para resolver el recurso de reposición propuesto por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Que de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1066 de 2006 el procedimiento administrativo coactivo se encuentra regulado por el artículo 823 y siguientes del estatuto tributario, por el código general del proceso y por el código contencioso administrativo, cuando se presenten vacíos en la norma debe remitirse al Código general del proceso o al C.P.A.C.A

Es menester, resaltar que de acuerdo al artículo 833 – 1 del estatuto tributario, las decisiones que se tomen dentro del proceso administrativo de cobro son de trámite, lo que se traduce a que son preparatorias de ejecución o definitivas, conllevando a que las mismas no sean susceptibles de ser recurridas con excepciones a la resolución que resuelve o falla las excepciones propuestas en contra del mandamiento de pago, en la cual también se ordena además seguir adelante con la ejecución y remate de bienes embargados y secuestrados, por estar expresamente señalado de dicha manera en el artículo 834 del Estatuto tributario el cual reza "(...) *contra el acto que resuelve de forma negativa las excepciones interpuestas contra el mandamiento de pago, inicialmente procede recurso de reposición, bajo las reglas excepcionales que rigen el Estatuto Tributario y no debe confundirse con el recurso de reposición empleado en el código contencioso administrativo por lo tanto carece de recurso de apelación (...)*"

1º Contrario a lo decidido, la excepción de falta de título ejecutivo en relación con el cobro y cálculo de intereses es procedente, conforme a la ley 80 de 1993, la jurisprudencia del consejo de estado y los conceptos de la sala de consulta y servicio civil.....

En relación con el proceso de cobro coactivo importa decir que éste es un procedimiento especial contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, dispuesto como facultad para el cobro de acreencias a favor de entidades públicas. En relación con el Departamento del Putumayo, esta entidad tiene competencia para adelantar las acciones de cobro establecidas en las disposiciones legales y se rigen por las normas consagradas en el "reglamento interno de recaudo de cartera del Departamento del Putumayo", adoptado mediante Decreto 325 de 2017, este se encuentra supeditado a las normas y procedimientos regulados por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Código General del Proceso,



Estatuto Tributario Nacional y demás normas aplicables, concordantes y complementarias que regulan la materia.

Ahora bien, el documento que presta mérito ejecutivo a favor del Departamento del Putumayo, contiene una obligación clara, expresa y exigible, la cual está contenida en:

1º En los actos administrativo ejecutoriados que imponen a favor del Departamento del Putumayo, la obligación de pagar una suma líquida de dinero como es la resolución que declara el siniestro, y la resolución que resuelve recurso contra la misma.

2º Contiene un contrato y los demás actos administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.

3º La póliza de garantía No NB100100416 y sus anexos, la cual garantiza el pago de perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, a favor de la Entidad Pública antes indicada, la cual se integra con los demás actos administrativos ejecutoriados como la resolución que declara el siniestro.

Teniendo en cuenta que el título que se pretende ejecutar es complejo, porque se encuentra conformado por varios documentos que constituyen una unidad jurídica, por lo que se debe analizar en conjunto todos los documentos que lo integran para librar o no el mandamiento de pago.

En el caso que nos ocupa, el título ejecutivo complejo se conforma de los siguientes actos administrativos:

1º Contrato No 1225 del 28 de diciembre de 2018

2º Póliza de seguros No NB100100416, que garantiza el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 1225 del 28 de diciembre de 2018 en las siguientes situaciones: la no inversión del anticipo, el uso indebido del anticipo y la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

3º Resolución No 021 de 2023 que declara el siniestro con cargo al buen manejo y correcta inversión del anticipo, acto administrativo notificado a los ejecutados.

4º Resolución No 022 de 2023 por medio de la cual se resuelve los recursos de reposición en contra de la resolución No 021 de 2023.

5º Constancia de ejecutoria

El título en mención, cumple con los requisitos asignado en el artículo 422 del Código General del Proceso, es claro expreso y exigible, el mismo se encuentra en firme y ejecutoriado en vía gubernativa.

Respecto a los requisitos que debe cumplir un título para que pueda ser cobrado por jurisdicción coactiva la sentencia STC720-2021 la Corte a adoctrinado:

"(...) Los requisitos impuestos a los títulos ejecutivos, consignados en el artículo 422 del Código General del Proceso, relativos a tratarse de un documento proveniente del deudor o de su causante en donde conste una obligación clara, expresa y exigible, por supuesto se trasladan a los títulos valores y, en esa medida, si el instrumento no satisface tales presupuestos, no puede seguir adelante el cobro coercitivo (...)"

"(...) La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro

con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo (...).

"(...) La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida (...)"

Respecto al anticipo, según la ley 80 de 1.993., este es un préstamo que se le hace al contratista, por ende, este genera interés de mora. Si el contratista no devuelve el anticipo que no se ejecutó, esto puede generar intereses a favor del contratante. La legislación colombiana establece que los anticipos deben ser devueltos en caso de incumplimiento de la ejecución del contrato. Si no se devuelve en el tiempo establecido, el contratante puede reclamar el pago de intereses moratorios sobre el monto del anticipo no devuelto.

se observa que el título ejecutivo del que derivó el cobro coactivo que aquí se censura como por ejemplo la Póliza de seguros No NB100100416, establece derechos y obligaciones claras entre las partes, lo que permite ejecutar el contenido de la misma sin necesidad de un juicio previo, la póliza en mención es una pieza procesal que hace parte del título, este contiene una obligación clara expresa y exigible, como se puede evidenciar en la póliza en mención La COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., como garante se comprometió a garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 1225 del 28 de diciembre de 2018, en las siguientes situaciones: la no inversión del anticipo, el uso indebido del anticipo y la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

Por lo mencionado con base al título ejecutivo, especialmente con la Póliza de seguros No NB100100416, al Departamento del Putumayo le asiste el derecho de recuperar los dineros entregados al contratista en calidad de anticipo más los intereses generados hasta la fecha del pago total, No cobrar los intereses generados por el anticipo, se estaría causando detrimento y perjuicios financieros al Departamento, de conformidad con el artículo 4 de la ley 80 DE 1.993.

Respecto a la vulneración de los derechos que le asiste a la Compañía Mundial de Seguros, no es cierto, como podemos ver los actos administrativos que conforman el título ejecutivo demuestran ser plena prueba de que a los deudores se les garantizó los derechos constitucionales como el debido proceso, de contradicción y de defensa, es así que tuvieron la oportunidad de controvertir el título mediante recurso de reposición, el cual fue resuelto por la Administración Departamental en su debido tiempo, por lo que a los deudores no se le trasgredió los derechos antes citados por haber tenido la oportunidad de controvertir los actos administrativos en vía gubernativa.

Como es el decir del ejecutado que se violó el principio de legalidad, no es cierto, toda vez que por remisión de la ley 1066 de 2006, las Entidades Públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado Colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel Nacional, Territorial, incluido los órganos Autónomos y entidades con régimen especial

otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectiva las obligaciones exigibles a su favor y para estos efectos, deberá seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. De ahí que la norma especial para adelantar los procesos por vía coactiva es el Estatuto Tributario, en caso que haya vacíos en la norma debe remitirse al Código general del proceso o al C.P.A.C.A., esto es que cuando la norma especial de cobro coactivo establece los términos de aplicación, se debe dar cumplimiento a esta, de lo contrario debe remitirse a las normas aplicables para el caso en concreto.

Respecto a la normatividad aplicable a la tasa de intereses en el presente caso, es importante traer a colación las siguientes normatividades, el Decreto 4473 de 2006 "Por el cual se reglamenta la ley 1066 de 2006" "Artículo 5° establece: Las entidades objeto de la Ley 1066 de 2006 aplicarán en su integridad, para ejercer el cobro coactivo, el procedimiento establecido por el Estatuto Tributario Nacional o el de las normas a que este Estatuto remita", por su parte el artículo 7° del mentado decreto determina que las obligaciones diferentes a impuestos, tasas y contribuciones fiscales y parafiscales continuarán aplicando las tasas de interés especiales previstas en el ordenamiento nacional."

Por su parte el artículo 635 del E.T., establece: la tasa de interés moratorio será la tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora y en el entendido que el anticipo es un préstamo que hace la Entidad al contratista, la Administración Departamental realiza la liquidación de los intereses de las obligaciones conforme a las tasas establecidas por la Superintendencia financiera, a excepción de cuotas partes pensionales.

Que para el presente asunto, es aplicable las tasas de interés especiales previstas en el ordenamiento nacional, es decir las tasas establecidas por la superintendencia financiera, al respecto la Constitución Nacional consagra, en su artículo 335, que la actividad financiera, bursátil y aseguradora, en la medida en que implica el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos de captación, es una actividad de interés público; por ello, se señala que esta actividad solamente puede ser ejercida con previa autorización del Estado, según lo establezca la ley. Asimismo, establece que el Gobierno Nacional, al intervenir en esta actividad, debe promover la democratización del crédito. La propia Constitución Política indica cómo se reparten las competencias entre las distintas autoridades que expiden normatividad para el ejercicio de esta actividad. Así, se dispone que el Congreso de la República tiene facultades para expedir leyes marco que regulen la actividad financiera, bursátil y aseguradora; asimismo, para regular el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (art. 150, n. 19, lit. d). Una vez expedidas las correspondientes leyes marco, el Gobierno Nacional procede a la expedición de decretos, mediante los cuales ejerce la intervención en dicha actividad financiera (art. 335). Estos decretos no pueden desconocer lo dispuesto en las leyes marco respectivas y tienen un ámbito más amplio que los decretos ordinarios, expedidos por el Gobierno en desarrollo de su potestad reglamentaria general.

La Carta Política establece que el Gobierno Nacional ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que desarrollan la actividad financiera (art. 189, n. 24); esta función la ejerce a través de la Superintendencia Financiera, organismo técnico con autonomía financiera y administrativa, que expide normas de carácter general, contenidas en resoluciones y circulares, con el objeto de instruir a las entidades sobre cómo deben ejercer su actividad.

Por su parte, la Junta Directiva del Banco de la República es la máxima autoridad monetaria, cambiaria y crediticia que, con sujeción a las leyes marco que expide el Congreso (art. 150, n.22),

profiere resoluciones y cartas circulares sobre el tema. Estas normas también tienen un carácter especial y su rango es similar al de la Ley.

En resumen, la normatividad aplicable al sector financiero está organizada jerárquicamente así: en primer lugar, en la Constitución Política de Colombia; en segundo lugar, las leyes marco expedidas por el Congreso de la República, las leyes ordinarias, las resoluciones y cartas circulares que expide el Banco de la República en desarrollo de sus funciones, y los decretos con fuerza de ley que expide el Gobierno con base en facultades extraordinarias, como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el siguiente nivel se encuentran los decretos reglamentarios que expide el Gobierno en desarrollo de las leyes marco y, finalmente, las circulares y resoluciones que expide la Superintendencia Financiera en ejercicio de su actividad de inspección y vigilancia.

Por lo antes expuesto y por tratarse de un proceso que se adelanta por jurisdicción coactiva nos remitimos a la norma especial tal como se explicó anteriormente.

2º La excepción falta de título ejecutivo por el indebido cobro de los intereses está probada - indebido ejercicio de la potestad de cobro coactivo. Contrario a lo afirmado por el Departamento del Putumayo, la obligación que se pretende ejecutar no solo supera el límite del valor asegurado, sino que además se fundamenta en el cobro de intereses que no se encuentran debidamente incorporados en los actos administrativos que conforman el título ejecutivo completo.....

Es importante recordar que el título ejecutivo se encuentra conformado por los siguientes actos administrativo.

1º Contrato No 1225 del 28 de diciembre de 2018

2º Póliza de seguros No NB100100416, que garantiza el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 1225 del 28 de diciembre de 2018 en las siguientes situaciones: la no inversión del anticipo, el uso indebido del anticipo y la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

3º Resolución No 021 de 2023 que declara el siniestro con cargo al buen manejo y correcta inversión del anticipo, acto administrativo notificado a los ejecutados.

4º Resolución No 022 de 2023 por medio de la cual se resuelve los recursos de reposición en contra de la resolución No 021 de 2023.

5º Constancia de ejecutoria

El no pago de intereses generados por un anticipo puede considerarse un perjuicio para la entidad pública. Según la legislación colombiana, los anticipos son pagos que se realizan antes de la ejecución del contrato y, al no pagarse los intereses generados por esos anticipos, se puede afectar la economía de la entidad, ya que podría haber un costo de oportunidad o un daño patrimonial. Si una compañía de seguros no cancela los intereses generados por un anticipo, podría estar causando perjuicios a la entidad pública. La falta de pago de estos intereses implica que la entidad pública no está recibiendo el beneficio económico correspondiente, lo que puede impactar su situación financiera y su capacidad para llevar a cabo sus proyectos. Como vemos, el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley 80 de 1993, refieren al tema en discusión.

Ley 80 de 1993: Esta ley establece los principios de la contratación estatal y regula aspectos relacionados con los anticipos, indicando que estos generan derechos y obligaciones tanto para la entidad pública como para el contratista.

Código Civil: En particular, los artículos relacionados con el pago de intereses y la responsabilidad contractual pueden aplicarse a situaciones donde no se cumplen las obligaciones, como el pago de intereses sobre anticipos.

Código de Comercio: Este también establece principios sobre las obligaciones comerciales, que pueden incluir la obligación de las compañías de seguros de cumplir con sus contratos, lo que incluiría el pago de intereses si así se estipula.

El incumplimiento de estas normativas por parte de una compañía de seguros podría interpretarse como un perjuicio a la entidad pública, dado que la falta de pago de los intereses puede afectar sus finanzas y proyectos, esto podría dar lugar a reclamaciones legales por parte de la entidad pública contra la compañía de seguros, ya que se espera que las aseguradoras cumplan con sus obligaciones contractuales, incluyendo el pago de intereses por anticipos. Esto se consideraría un incumplimiento que puede llevar a sanciones y consecuencias legales.

Si bien es cierto, que en la póliza de seguros No NB100100416, no se incorporan como tal los intereses, pero si La COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., como garante mediante la póliza en mención, se comprometió a garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 1225 del 28 de diciembre de 2018, en las siguientes situaciones: la no inversión del anticipo, el uso indebido del anticipo y la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

Así las cosas, por vía de cobro coactivo no es procedente analizar la legalidad de la póliza otorgada ni el límite de su cobertura, pues ello conllevaría a reabrir el debate de la responsabilidad de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., de pagar los perjuicios ocasionados al Departamento del Putumayo por el incumplimiento del contrato 1225 de 2018.

Por lo expuesto, al Departamento del Putumayo le asiste el derecho y se encuentra obligado a cobrar los intereses generados por el anticipo, en calidad de perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato.

3º Contrario a lo decidido por el departamento del putumayo, está probado que la obligación que se pretende ejecutar supera el límite del valor asegurado.....

Como ya se explicó en el numeral 2 de las consideraciones, que póliza de seguros No NB100100416, es una pieza procesal que conforma el título ejecutivo, en ella se establece claramente que la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., como garante se comprometió a garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 1225 del 28 de diciembre de 2018, así mismo se explicó que no cancela los intereses generados por un anticipo, podría estar causando perjuicios a la entidad pública. La falta de pago de estos intereses implica que la entidad pública no está recibiendo el beneficio económico correspondiente, lo que puede impactar su situación financiera y su capacidad para llevar a cabo sus proyectos.

Pues, el Departamento del Putumayo no puede soportar detrimentos o perjuicios causados por el incumplimiento del contrato ni mucho menos por la irresponsabilidad del contratista y posteriormente por el incumplimiento de pagar por parte de la aseguradora los perjuicios causados por el incumplimiento del contrato.



4º Contrario a lo decidido, está probada la excepción de pago efectivo y la extinción de la obligación por pago ante la indebida tasación de la deuda, conforme a los intereses civiles aplicados según el artículo 4º, numeral 8º de la ley 80 de 1993

El abono realizado por la Compañía Mundial de Seguros S.A., no es suficiente para cubrir la totalidad de la obligación, a la fecha la ejecutada tiene pendiente el pago de intereses corrientes y moratorios, en calidad de perjuicios ocasionados con el incumplimiento del contrato. Conforme a la

garantía del contrato 1225 de 2018, que establece: El Amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo **cubre el amparo de los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: No inversión del anticipo, El uso indebido del anticipo y la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.**

Conforme a los intereses civiles aplicados según el artículo 4º, numeral 8º de la ley 80 de 1993, al respecto en el numeral 1 de las consideraciones del presente escrito, se da repuesta al porque no se debe aplica estas normas que cita el recurrente y porque se aplica lo establecido en la ley 1066 de 2006, su decreto reglamentario y lo establecido en el Estatuto Tributario.

Teniendo en cuenta que lo que se persigue por vía coactiva son dineros del erario público el Departamento del Putumayo, está en la obligación de recuperar esta cartera por concepto de intereses generado por el anticipo entregado al contratista, los cuales son considerados como perjuicios por el incumpliendo del contrato 1225 de 2018, la cual están amparados mediante la póliza de seguros No NB100100416.

Al respecto citamos la ley 80 que en su artículo 4 fija los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales.

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igualess exigencias podrán hacer al garante.

2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.

3o. Solicitarán las actualizaciones o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.

4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

Para aclarar esta contradicción importante traer a este asunto lo establecido en el 835 del Estatuto Tributario, sobre la intervención del contencioso administrativo que prevé, dentro del proceso administrativo de cobro coactivo, sólo serán demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución;



la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.

El Consejo de Estado en la Sentencia del 11 de julio de 2013, exp.18216 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, señala que la sola interposición de la demanda no es suficiente, ya que para verificar que la demanda cumple con la totalidad de requisitos se hace necesario que la misma sea admitida por el juez de conocimiento.

Así las cosas, si se impetra una demanda de nulidad contra un acto que determina cobrar una obligación por parte de la Administración, que aún no es admitida, puede concluirse que no existe en ese momento una intervención efectiva de la jurisdicción, pues no ha surgido una relación jurídico-procesal, hecho que si ocurre cuando se ha admitido una demanda.

Por lo anterior, la presentación de la demanda no garantiza su admisión, por lo que la simple interposición de la demanda no constituye excepción contra el mandamiento de pago. La excepción que presenta el artículo 831 del E.T. que es la de interposición de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, su efecto no es otro que el de suspender el proceso de cobro coactivo que se está adelantando, esta excepción se acredita con la admisión de la demanda, en el caso que nos ocupa el deudor no demostró en la interposición de las excepciones que la supuesta demanda ya estaba admitida, para la Administración Departamental no existe traba en la relación jurídico procesal entre las partes.

6° La resolución no. 075 del proceso de cobro coactivo no. 2024-007, expedida mediando falsa motivación, al igual que conjura una desviación de poder y transgrede los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, y vulnera lo señalado en cada una de las excepciones propuestas. la resolución no. 075 del 24 de junio de 2024 se expidió mediando falta de motivación.

La falta de motivación en la resolución que decide las excepciones en el cobro coactivo se puede presentar cuando la Entidad que emite la resolución no justifica adecuadamente las razones por las cuales acepta o rechaza las excepciones planteadas, como podemos ver cada respuesta a las excepciones planteada por el deudor se rechaza con fundamentos jurídicos aplicables al procedimiento en cobro coactivo, es importante recordar que por remisión de la ley 1066 de 2006, las Entidades Públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado Colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel Nacional, Territorial incluido los órganos Autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectiva las obligaciones exigibles a su favor y para estos efectos, deberá seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

De ahí que la norma especial para adelantar los procesos por vía coactiva es el señalado en el Estatuto Tributario, en caso que haya vacíos en la norma debe remitirse al Código general del proceso o al C.P.A.C.A. La Administración Departamental no puede acceder a dar aplicación a normas o términos diferentes a los establecidos en el Estatuto Tributario.

Los temas en discusión que se prestan en este caso son resueltos conforme a la norma que nos regula por encontrarse ahí establecidas, por lo que el deudor no debe pretender caprichosamente la aplicación de normas diferentes a las establecidas en el E.T.

Respecto a la desviación de poder y transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa que menciona el recurrente, no es cierto toda vez que la desviación de poder en la resolución que niega excepciones en un proceso de cobro coactivo se produce cuando la autoridad competente actúa de manera contraria a los fines para los cuales se le otorgó el poder, situación que no es propia de esta contradicción toda vez que la funcionaria ejecutora se limitó conforme a su competencia y a las normas aplicables para adelantar el cobro coactivo como es el Estatuto Tributario, y cuando hay vacíos en la norma se remite al Código general del proceso o al C.P.A.C.A.

Por otra parte, como es el decir del recurrente que se le trasgredió los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa con la resolución No 075 del 24 de junio de 2024, tampoco es cierto, la misma fue notificada a los deudores dándole la oportunidad de ejercer la defensa y contradecir el acto administrativo en mención, lo cual el deudor hizo uso de estos derechos mediante la interposición del recurso de reposición.

7º Contrario a lo decidió por el Departamento del Putumayo las medidas cautelares decretadas por la Gobernación del Putumayo en la orden de pago supera el tope de embargabilidad permitidos por los estatutos tributarios y la normatividad vigente.

Dentro del proceso No 2024-007, se expidió la resolución No 059 de 2024, la cual resolvió librar mandamiento de pago, la suma de (\$ 5.247'963.388,45) más los intereses generados por el anticipo no amortizado del contrato 1225 de 2018, desde la fecha que el Departamento giró el anticipo, hasta la fecha que se realice el pago total de la obligación, así mismo se ordenó medida preventiva hasta la concurrencia de (\$ 16.509'304.622,8), conforme lo consagrado en el artículo 838 del E.T. que establece "*El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses*".

Teniendo en cuenta el abono realizado por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A, la Administración Departamental, mediante oficios No 1313 a 1320 del 25 de julio de 2024 solcito a las Entidades financieras la reducción de la medida cautelar, hasta la concurrencia de \$ 9.786.394.604,68, esto con el fin de no trasgredir los límites y condiciones establecidas en el artículo 838 del E.T.

Respecto a medidas cautelares la Corte en Sentencia C-379/04 manifiesta: *las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido. Así mismo sostiene la Corte "Las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal. Sin embargo, la Corte ha afirmado que "aunque el Legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a*

afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio.

Por otra parte, me permito informarle que conforme a lo establecido en el artículo 837-1 del E.T., refiere. En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad.

Por lo expuesto, la Administración Departamental ordenara seguir adelante con la ejecución hasta tanto haya una decisión del Juez de conocimiento de la demanda interpuesta por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS, que ordene la suspensión o terminación del proceso que se adelanta en cobro coactivo.

En mérito de lo expuesto, la Tesorero General del Departamento del Putumayo, en calidad de funcionaria ejecutora de los procesos que se adelantan por vía coactiva a favor del Departamento del Putumayo,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la resolución N° Resolución 075 del 8 de agosto de 2024, por medio de la cual resuelven negativamente las excepciones presentadas contra el mandamiento de pago, librado dentro del proceso 2024-007, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: ORDENA SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN, del proceso N° 2024-007, adelantados contra la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A Y OTROS

TERCERO: NOTIFICAR, el contenido de la presente resolución al representante legal de la **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**, o a su apoderado conforme lo establece el artículo 565 del E.T., modificado por el artículo 45 de la ley 1111 de 2006 y 569 de E.T., advirtiéndole que contra la presente no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 834 del Estatuto Tributario.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VANESSA TATIANA RIVERA SAMBONI
Tesorera General del Departamento del Putumayo

Elaboró	Doris Amparo Ortiz Ordoñez	Secretaria de Hacienda- Tesorería	Profesional Universitario Tesorería-Cobro Coactivo
Reviso	Marlie Yamile Cabrera Bautista	Secretaria de Hacienda- Tesorería	Abogada especialista secretaria de Hacienda- Tesorería

